

Expertos llaman a mejor coordinación y labor del Estado para hacer frente a la inseguridad rural

Jorge Guzmán B.
prensa@latribuna.cl

Expertos, autoridades públicas y representantes del sector privado y sociedad civil se reunieron ayer en Los Ángeles para analizar en profundidad algunos de los crecientes problemas de violencia y delitos que se registran en las zonas rurales de la región del Biobío.

En el seminario, organizado por Diario La Tribuna, Radio San Cristóbal y Agencia Media Chile, se destacó la urgente necesidad de fortalecer la presencia del Estado en estos territorios, mejorar la coordinación entre sus instituciones y aplicar medidas preventivas para proteger la producción agroforestal, así como mejorar la seguridad de las comunidades afectadas.

El encuentro se inició con las palabras del delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslocher, quien consideró que "es importante hablar de seguridad en el mundo rural, porque la seguridad es un medio para vivir mejor y avanzar".

Respecto de la situación particular que se vive en la provincia de Biobío -actualmente bajo estado de excepción constitucional- planteó que "la presencia militar en territorios debe estar acompañada por la presencia del Estado en los sectores rurales", declaró.

Autoridades y representantes del sector privado y sociedad civil respondieron a la invitación de Diario La Tribuna para analizar la importancia de contar con más información y medidas frente a delitos que afectan gravemente la producción agroforestal y la calidad de vida de las comunidades.



REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO, privado y académico participaron en el seminario organizado por Diario La Tribuna, Radio San Cristóbal y Agencia Media Chile.

El representante del Gobierno destacó que "la disminución de la violencia en las zonas rurales se ha dado porque las comunidades se han incluido en el diálogo, porque todos tenemos un rol importante que cumplir en materia de seguridad".

SEGURIDAD RURAL: CLAVE PARA UN FUTURO MÁS PRÓSPERO

La primera expositora del seminario fue la arquitecta y directora ejecutiva de la Multigremial de La Araucanía, Claudia Lillo, quien en

su presentación "Violencia y Delitos Rurales y su Efecto en la Producción Agrícola", sostuvo que "los delitos en las zonas rurales son más difíciles de combatir, porque tiene menos prensa, menos gente que le importa y menos votos".

Lillo comentó que la agricultura representa a las ocho principales actividades de la zona, "pero que son muy lejanas para Santiago, las capitales regionales y las ciudades". "Hoy el 79% de los agricultores ha sido víctima de robos en los últimos 12 meses", detalló.

La directora ejecutiva de la Multigremial de La Araucanía mostró que "en 2024 los hechos de violencia disminuyeron en 76%, por lo que se demostró que ha sido una respuesta desde el Estado hacia la violencia".

"Cuando asume el Presidente Boric, durante 50 días estuvimos sin Estado de Emergencia y los hechos de violencia saltan a 200%", recordó. Clau-

dia Lillo explicó que "en 2023 se empezó a trabajar directamente con los gremios para implementar medidas para poder producir".

La representante de la Multigremial de La Araucanía alertó que en la actualidad "tenemos menos hechos de violencia, pero con una incidencia mucho más alta y con un aumento de los homicidios".

"Las bandas están conformadas por un total de aproximadamente 500 personas que tienen de rodillas al país y el Estado es el responsable de mantener seguros a quienes habitan su territorio", recalcó.

En relación a los incendios forestales, Lillo detalló que "el 50% de éstos ocurre entre Biobío y la Araucanía y en mi región en el 56% de los casos no se puede conocer la causa, porque no se pueden entrar a los predios".

Lillo explicó que debido a lo anterior "ha habido una



EL FORO PANEL CON QUE CERRÓ LA ACTIVIDAD, donde participaron los expositores y los jefes locales de las policías.

disminución de la producción agrícola y 12.700 hectáreas donde el Estado no tiene tutela. Esto es 7,5 veces la comuna de Ñuñoa". La directora ejecutiva de la Multigremial de La Araucanía llamó a "profundizar el Estado de Emergencia con el apoyo de la ciudadanía y la comunidad política".

Claudia Lillo invitó a que "el Ministerio de Seguridad prevenga y combata la violencia, o va a ser otro espacio político que no va a servir". "Tenemos que exigir al Ministerio de Seguridad que nos entregue data actualizada de esta materia para poder poner las alertas antes", cerró.

ROBO DE CABLES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

El segundo expositor de la jornada fue el gerente general de Coopelan, José Luis Neira, quien presentó un detallado análisis del fenómeno del robo de conductores eléctricos y su impacto el mundo rural, especialmente en la comuna de Los Ángeles.

El ejecutivo explicó que en las zonas donde operan se sufre el robo infraestructura eléctrica, pero rescató que "las cooperativas hemos aportado en el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de las personas del sector rural".

"Nosotros hemos definido zonas de alto riesgo, para poder hacer una gestión preventiva. Creemos que gracias a eso tenemos menos robos que otras empresas", explicó el gerente general de la cooperativa eléctrica rural.

El costo de material y de mano de obra de estos eventos para Coopelan es de 600 mil millones de pesos, además de costos indirectos como el cambio de planificación y de las brigadas para recuperar la infraestructura dañada.

Neira explicó que "hoy también están robando transformadores, que tienen 120 a 150 kilos de conductores, lo que

en el mercado negro puede tener un valor de \$1.000.000 a \$1.200.000". Sobre el impacto en el sector rural, alertó que el efecto es mayor que en el urbano, porque se cortan también los servicios básicos.

"En promedio, por año, los cortes son de nueve a 10 horas de afectación", precisó el gerente general de Coopelan. Debido a esta situación, la empresa ha tomado medidas preventivas a nivel interno así como con la comunidad, las que han incluido tecnologías que les permiten trabajar en el combate de este delito.

Sobre la reducción, contó que "se debe atacar la comercialización del cobre robado, y así va a bajar el robo". "Debemos profundizar el trabajo con PDI, Carabineros, Fiscalía, Aduana y Servicios de Impuestos Internos y en el ámbito legislativo se deben agravar las penas y fortalecer la trazabilidad del cobre que se compra", detalló José Luis Neira.

HURTO DE INSUMOS AGROQUÍMICOS

El consultor y docente en Seguridad Pública Ciudadana y columnista de diario La Tribuna, Jorge Contreras Blümmel, fue el tercer expositor del encuentro y se refirió al robo de insumos agroquímicos en Chile.

El también académico de la U. Adolfo Ibáñez detalló que los delitos más comunes en el sector son "el robo de cables, robo de infraestructura productiva agrícola y el abigeato".

El consultor detalló que "cada agricultor afectado ha sufrido robos de un promedio de \$19 millones, lo que además puede impactar en la producción de toda la temporada". "Esto está afectando a todos los agricultores, con más espalda económica o con menos".

El experto alertó que "además, los agricultores cuentan que les roban justo luego de



que retiran los productos. Por eso además no los están guardando en bodegas en el campo, como antes". "Un 75% de los agricultores que participaron en una encuesta planteó que ha sufrido robo de insumos, y un 71% ha hecho las denuncias, pero el 92% acusa que no fueron contactados por Fiscalía", lamentó Jorge Contreras Blümmel.

Contreras agregó que al no estar tipificado el delito, ni Fiscalía ni Carabineros puede conocer cifras respecto al robo de insumos. El docente en Seguridad Pública pidió a las autoridades "que se legisle. Hoy han ingresado proyectos que buscan tipificar el robo de insumos agrícolas".

"Desde el mundo privado tenemos que aportar información a la autoridad y hoy lamentablemente estamos muy precarios en este ámbito", lamentó Contreras. Por ello, llamó a que se implementen "observatorios para mejorar la persecución del delito".

"falta que todos tiremos la carreta para el mismo lado y se hagan más denuncias".

A su vez, el prefecto Patricio Rojas, jefe de la Policía de Investigaciones en la provincia de Biobío, consideró que "lo que nos falta es voluntad de sacar las investigaciones de estos delitos adelante. Nosotros hacemos un trabajo silente, pero siempre presente".

"Nuestro actuar es bajo

la instrucción del Ministerio Público, pero sí debemos asociarnos con todas las instituciones", proyectó. Rojas llamó a la ciudadanía a que les "entreguen la información para ordenarla, analizarla y cooperar entre instituciones".

El coronel de Carabineros llamó a "no tener miedo a entregar información en caso de actos sospechosos, no necesariamente a través de una denuncia".



JOSÉ LUIS NEIRA, gerente general de Coopelan.

COLABORACIÓN CIUDADANA ES CLAVE COMBATIR VIOLENCIA RURAL

Luego de las tres exposiciones se realizó un foro-panel en que participaron los citados expertos, además de los máximos jefes policiales de la provincia de Biobío.

En esa instancia el coronel Marcelo Salas Carvacho, jefe de la Prefectura de Carabineros de Biobío, dijo que para solucionar la problemática



JORGE CONTRERAS, docente y consultor en seguridad pública.



CLAUDIA LILLO, directora ejecutiva de la Multigremial de La Araucanía.